



Radicado
2018CS025128-1
Fecha 2018-09-19

SGN-C054-F04

GOBERNACION DEL HUILA

RESOLUCIÓN 2221 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por la Ley 9 de 1979, Ley 715 de 2001, Ley 1437 de 2011, Resolución 2003 de 2014, Decreto 1011 de 2006 compilado en el Decreto 780 de 2016 y las demás que le modifiquen y o complementen y

CONSIDERANDO

Que esta Autoridad Sanitaria profirió Auto de Apertura de Investigación Administrativa y Formulación de Cargos No 034 de 2017 contra EMERCONT COLOMBIA SAS y SALUD LASER SAS (2017CS024290-1).

Que mediante Resolución 1382 del 2018 "Por medio del cual se sanciona a prestadores de servicios de salud", este Despacho resolvió:

" ARTICULO PRIMERO SANCIONAR a los prestadores de servicios de salud EMERCONT COLOMBIA SAS identificado con Nit 900973155-2, código de prestador 4100101833-01, ubicado en la carrera 4 # 14 – 26 en la ciudad de Neiva y SALUD LASER SAS identificado con Nit 900 324 272-2, código de prestador 4100101209-01, ubicado en la calle 18A No 6-46 en la ciudad de Neiva, con AMONESTACIÓN por la vulneración de las normas del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SOGCS, como se determinó en la parte motiva de este acto administrativo, advirtiéndoles que deben abstenerse de ejecutar acciones que atenten contra la seguridad, integridad, salud y vida de los usuarios conforme a lo establecido en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SOGCS

ARTICULO SEGUNDO. SANCIONAR al prestador de servicios de SALUD LASER SAS identificado con Nit 900.324 272-2, código de prestador 4100101209-01 ubicado en la calle 18A No. 6-46 en la ciudad de Neiva, con MULTA equivalente a MIL SALARIOS DIARIOS MÍNIMOS LEGALES vigentes para el año 2018, es decir la suma de VEINTISEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$26 041 400) M/cte , por la vulneración



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716; e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación



SC4353 - 1



GOBERNACIÓN DEL HUILA



RESOLUCIÓN **2224** DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

de las normas del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SOGCS y colocar en riesgo colocar en riesgo la mejora de los resultados de la atención del usuario, conforme a la parte motiva de este acto administrativo

ARTICULO TERCERO Para efectos de la sanción pecuniaria impuesta y su respectiva imputación, deberá SALUD LASER S A S realizar los siguientes trámites, todos dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución a) La suma contemplada en el artículo segundo de la parte resolutive de este acto administrativa, deberá consignarse en la cuenta de ahorros No.7-452-020-755 del banco de Colpatria a nombre de DEPARTAMENTO DEL HUILA-OTROS INGRESOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS –SALUD-NIT 800.103.913-7 b) Presentar original de la consignación realizada en el banco y copia de la resolución sancionatoria en el Área Jurídica de Habilitación de la Secretaria de Salud Departamental del Huila, inmediatamente después de realizada la citada consignación.

ARTICULO CUARTO. En firme este acto administrativo y con fundamento en el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 2.5.3.7.23 del Decreto 780 de 2016, si no se presenta copia del comprobante de pago de la multa señalada en el artículo primero, en el término señalado en el artículo segundo de este proveído, se remitirá copia auténtica del mismo a la jurisdicción coactiva del Ente Territorial para que proceda al cobro respectivo contra SALUD LASER SAS y EMERCONT COLOMBIA SAS **ARTICULO QUINTO** Notificar al representante legal de cada uno de los prestadores de servicios de salud SALUD LASER SAS y EMERCONT COLOMBIA SAS y o a quien haga sus veces en cada momento procesal, la presente resolución, haciéndole saber que contra el mismo procede el recurso de reposición ante la Secretaria de Salud Departamental de conformidad con los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011, el cual podrá interponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo ..”

Que el 26 de julio de 2018 el señor FRANCISCO ANDRES ROJAS DEVIA Representante Legal de SALUD LASER S A S, se notificó personalmente de la Resolución 1382 del 2018 “Por medio del cual se sanciona a prestadores de servicios de salud”.



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716, e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación



SC4353 1



RESOLUCIÓN 2224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

Que el 26 de julio de 2018 el señor FAIBER ALEXANDER DUSSAN FARFAN Representante Legal de EMERCONT COLOMBIA SAS, se notificó personalmente de la Resolución 1382 del 2018 *"Por medio del cual se sanciona a prestadores de servicios de salud"*

Que el 10 de agosto del 2018 el señor FRANCISCO ANDRES ROJAS DEVIA Representante Legal de SALUD LASER S.A.S, radicó ante este Despacho *"Recurso de reposición contra la decisión administrativa contenida en la Resolución 1382 del 17 de julio de dos mil dieciocho (2018)"*, en veintiséis (23) folios

RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR SALUD LASER S.A.S

A Continuación se presenta textualmente el Recurso de Reposición propuesto ante este Despacho, por el representante legal del prestador de servicios de salud SALUD LASER S.A S.

*"... FRANCISCO ANDRÉS ROJAS DEVIA, mayor y domiciliado en Neiva, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 7 728 502 expedida en Neiva, actuando en mi condición de Apoderado de **SALUD LASER S.A.S.**, Nit No. 900 324 272-2, Entidad Investigada en el asunto de la referencia, comedida y respetuosamente me permito formular recurso de **reposición** contra el acto administrativo contenido en la Resolución No 1382 del diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018), "Por medio del cual se sanciona a prestadores de servicios de salud", en los siguientes términos*

i) De la oportunidad en el ejercicio del medio del control por parte de los Administrados —Vía Gubernativa—

Dispuso este Ente Sancionador que contra el acto administrativo que se acusa por ser violatorio de la Ley sustancial y procedimental, conforme lo señalado en el artículo 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, "procede el recurso de reposición ante la Secretaría de Salud Departamental", el cual





GOBERNACION DEL HUILA


RESOLUCIÓN 2224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

puede formularse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión administrativa acusada

La publicidad de la decisión administrativa censurada se realiza personalmente el veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018), por tanto, el término de diez (10) días para el ejercicio del recurso de reposición fenece el diez (10) de agosto de dos mil dieciocho (2018), **ejercitándose en término y oportunidad este medio de defensa jurídico**.

Para iniciar, procederé a realizar un análisis jurídico de las potestades administrativas del Ente Territorial Departamental en salud, su potestad sancionadora, el sometimiento de sus actos al principio de legalidad, los derechos y el procedimiento que se deben tener en cuenta dentro de una investigación administrativa —cualquiera sea su naturaleza—, y algunas consideraciones

accionales del principio de proporcionalidad, para luego sí adentrarnos con las consideraciones de la censura en el caso particular. Veamos:

ii) Las conductas imputadas a Salud Laser S.A.S.-

Señala el artículo 47 de la ley 1430 y siete de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", que los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales se sujetarán a las disposiciones de la parte primera de este Estatuto, que las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria pueden iniciarse de oficio o por petición de cualquier persona; que en el evento de establecerse de la existencia méritos para promover procesos sancionatorios, se le comunicará al interesado; de existir mérito, concluida la etapa preliminar, se formulará cargos mediante acto administrativo en el que se ordena señalar, con precisión y claridad, los hechos los sujetos que intervienen en la investigación las normas presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que resultaría procedentes.

Esta pieza sustancial dentro del procedimiento administrativo constituye el eje del proceso sancionatorio, alrededor del cual gira el proceso. Es el mecanismo del Estado que sirve para requerir a los Administrados las explicaciones que considere pertinentes, respecto del



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716, e-mail ssalud@huila.gov.cowww.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernacion del Huila – El Camino es la Educación

SC4353 1



RESOLUCIÓN 2224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

desconocimiento o vulneración de sus deberes y obligaciones funcionales, a través de una determinada conducta, por acción u omisión

El pliego o auto de imputación de cargos cumple una función garantizadora. En él se delimita el objeto de la relación jurídico procesal, a partir del juicio de valor elevado por la Administración en ejercicio del poder de policía administrativo de vigilancia, inspección y control. Es el marco para deprecar las explicaciones al encartado. Es la pauta para el encartado de hacer su exposición de exculpaciones frente a los hechos endilgados. Adicionalmente, se indican las normas vulneradas y su concepto de violación.

A SALUD LASER S.A.S., por los mismo hechos que motivan al inicio de nuevo procedimiento administrativo sancionatorio y concluye en el acto administrativo sancionatorio acusado, se le adelantó procedimiento administrativo dentro del cual se cumplieron con las etapas contempladas en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se le imputaron hechos, se le citó a diligencia de cargos y se adoptaron medidas para prevenir la ocurrencia de hechos nuevos que pudieran afectar la calidad de los servicios de salud que se prestan.

El procedimiento administrativo tuvo unas etapas, se les citó a diligencia de cargos y descargos, se le imputaron unas conductas como violatorias de la ley sustancial, se escucharon en descargos, esto es, se le permitió ejercer el derecho de defensa y contradicción, y se impusieron medidas o sanciones.

Observemos que la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA, en cabeza de su nominadora, Doctora YANID PAOLA MONTENEGRO GARCÍA, inicia proceso administrativo sancionatorio en contra de EMERCONT COLOMBIA S.A.S. y SALUD LASER S.A.S., disponiendo a citar a sus Representantes de Legales para que concurriera a diligencia de cargos, etapa surtida el diecisiete (17) de julio de dos mil diecisiete (2017), en la cual se escucharon los medios de defensa y contradicción de los sujetos que intervienen como pasivos en esta investigación, y como medidas de orden administrativo disciplinario —sanciones—, se dispuso los siguientes compromisos:





GOBERNACIÓN DEL HUILA



4224

RESOLUCIÓN _____ DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

Elaborar plan de mejoramiento donde se establezcan acciones orientadas a la capacitación continua del personal, socializando el Manual de Misión Médica, Trabajo bajo Presión, Tolerancia a la Frustración, Comunicación Asertiva y motivación

De igual forma, plantear estrategias que promuevan el buen trato por parte de los usuarios, socializando los derechos y deberes, como se establece en la política de Humanización de los Servicios de Salud

Reportar a la SECRETARÍA DE SALUD, en el formato establecido por el Ministerio, las infracciones o incidentes de Misión Médica, cada vez que se presenten

- Participar en la MESA DEPARTAMENTAL DE MISIÓN MÉDICA, en el momento en que sean convocados."

*Ante el actuar violatorio de los principios y valores enmarcados dentro del procedimiento administrativo sancionador, es menester señalar, que uno de los principios configuradores de nuestro ordenamiento jurídico, y vinculado tradicionalmente a los principios constitucionales de legalidad y tipicidad de las infracciones es el principio de "**non bis in ídem**", literalmente traducido como "**no dos en uno**"; el cual tiene un doble significado. Por un lado, en su vertiente material, **impide que nadie pueda ser sancionado dos veces por unos mismos hechos en virtud de un mismo fundamento**; y por otro, en su vertiente procesal, dicho principio **impide también el inicio de un nuevo procedimiento en cada uno de estos órdenes (administrativo o penal)** como consecuencia de los efectos de la litispendencia (litigio pendiente) y la cosa juzgada*

*El Estado Sancionador, llámese orden jurisdiccional o administrativo, debe aplicar los principios establecidos la Constitución Política El Constituyente de 1991 hizo un gran esfuerzo —ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE— por consagrar de forma amplia el non bis in ídem, cuyo contenido se encuentra regulado expresamente en el final del inciso 4° del artículo 29 superior, y en materia administrativa, en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, al señalar que "**En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in ídem**"*



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716, e-mail ssa@huila.gov.co

www.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernacion del Huila – El Camino es la Educación



SC4353 - 1



GOBERNACION DEL HUILA



RESOLUCIÓN 2224 DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

El concepto fundamental de este principio, el cual no es otro que impedir que una persona, sea natural o jurídica, no pueda ser sancionada de manera sucesiva simultánea o reiterada por un hecho que fue sancionado por la misma u otra autoridad administrativa o una judicial

Esta limitante respecto del ejercicio desbordado del poder sancionador de imponer sobre la base de los mismos hechos dos o más sanciones administrativas, es desconocido por este Ente de vigilancia, control y aseguramiento en la prestación de los servicios de salud, pues se sanciona dos veces por la misma conducta

Adicionalmente, en el acto administrativo sancionatoria, se impone doble sanción por la misma conducta, como es, la amonestación y la sanción económica, dualidad sancionatoria reprochable porque los cargos imputados a los sujetos Investigados son igualitarios, no son disimiles, razón por la cual no se entiende qué razones o criterios discrecionales le permiten imponer a la Institución Prestadora de Servicios de Salud EMERCONT COLOMBIA S A S, la sanción de amonestación, y a SALUD LASER S A S, la sanción de amonestación y la multa consistente en el pago del equivalente a mil (1.000) salarios diarios mínimos legales vigentes para el año 2018, es decir, la suma de veintiséis millones cuarenta y un mil cuatrocientos pesos (\$26.041.400.00) m/cte.

En el auto de apertura de investigación administrativa y formulación de cargos No 04 del dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA como elemento fáctico para fundamentar el inicio de la investigación hace referencia al incidente presentado por la misión médica de las Empresas habilitadas para la prestación del servicio de transporte de ambulancia básica SALUD LÁSER S A.S. y EMERCONT COLOMBIA S.A.S., el tres (3) de julio de dos mil diecisiete (2017).

Partiendo de este hecho, en el auto imputación de cargos se imputa de manera conjunta a los dos investigados el mismo hecho y como normas violadas, la señalada en el artículo 15 del Decreto 1011 de 2006, "Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud", como también, el artículo 5° de la Resolución 2003 del 2014, "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716, e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernacion del Huila – El Camino es la Educación



SC4353 - 1


RESOLUCIÓN 2224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

habilitación de servicios de salud", expedida por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,

*Al momento de realizar el estudio de la conducta en relación con las normas imputadas como violadas, se le señalan textualmente lo contemplado en el artículo 1° y 2° de las disposiciones en cita, respectivamente, asegurando, lo que constituye un prejuizgamiento y desbordado ejercicio del poder sancionatorio, que de "los hechos descritos en este auto, **constituyen una clara infracción a las normas antes citadas y son prueba de la ejecución de una conducta contraria a las disposiciones vigentes de nuestro ordenamiento jurídico...** y con su actuar quebrantaron de manera directa las características del SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD" Seguidamente, concluye, que "En e/ presente caso los prestadores investigados, realizaron la cita declaración de cumplimiento, pero los hechos presuntamente ejecutados por ellos, referidos en este Auto, audiencia el no cumplimiento de las normas de inscripción y habitación[sic] de los prestadores de servicios de salud", sin explicar del por qué*

Partiendo de la base que el procedimiento administrativo sancionador, itero, que la Ley 1437 de 2012, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", en su artículo 47, señala que las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona, que en desarrollo de averiguaciones preliminares exista mérito para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado, que en caso de formular cargos, éste debe integrarse en acto administrativo que deberá contener, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serian procedentes, acto que deberá ser notificado personalmente, que el sujeto imputado cuenta con quince (15) días para presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer.

Resaltamos que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagra expresamente los principios rectores que se deben tener en cuenta en todo proceso administrativo sancionatorio, por lo que damos por descontado la obligación perentoria de su aplicación; no obstante, en virtud del principio del debido





RESOLUCIÓN 2224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

proceso, todas las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la

Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

Adicionalmente, en virtud del principio de legalidad, se deberá observar los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in ídem, es decir, que la conducta que se impute debe ser típica y adicional a ello, debe demostrarse la conducta antijurídica desplegada por el Investigado.

Así mismo, como toda investigación administrativa, se deberá partir del prisma jurídico de buena fe, bajo el entendimiento que el comportamiento del Investigado ha sido leal y fiel en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

No podemos perder de vista que la sanción administrativa en procesos de control de policía administrativo del Estado, tiene una función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales

*En todo caso, se deberá presumir la inocencia, que la falta será antijurídica solo cuando afecte el deber funcional **sin justificación alguna**, se presumirá la buena fe, se tendrá en cuenta la favorabilidad legal y que toda duda deberá favorecer al Investigado (Art 29 y 83 de la C P)- Esto es para significar y reiterar que la autoridad Investigadora es quien debe demostrar que el Investigado infringió el*

marco legal de las normas que se le imputan y se presentaron los presupuestos de hecho que dinamizan su aplicación

iii) De los principios de la actuación administrativa.-

1.-El poder de policía y la función de policía administrativa.- El concepto de policía, que generalmente es asociado de manera unívoca al cuerpo civil de funcionarios armados que recibe el nombre de Policía Nacional, es relevante para el estudio del caso sub exámine, en





RESOLUCIÓN 2.224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

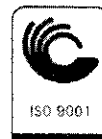
tanto ubica el problema de la conservación del orden público y la limitación de los derechos, en el plano de la prevención que corresponde a las autoridades administrativas

El concepto de policía dentro del Sistema Jurídico Colombiano se refiere no sólo al órgano especializado al que se le atribuye este nombre, sino también al poder jurídico de tomar decisiones encaminadas a limitar los derechos con miras a impedir alteraciones del orden público. En este sentido se ha afirmado que la policía administrativa "en términos generales puede ser definida como el conjunto de medidas coercitivas utilizables por la administración para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública y lograr de esa manera la preservación del orden público" ² Por el contrario, "las fuerzas de policía tienen una misión de ejecución material, siendo sus funcionarios agentes de ejecución, que no realizan actos jurídicos, sino operaciones materiales"

Adicionalmente, se distingue entre lo que sería el poder de policía propiamente dicho, que implica la expedición de normas generales y abstractas que regulan la actividad de los particulares, y la función de policía, que se presenta como una derivación del poder de policía y que se manifiesta en la expedición de actos jurídicos concretos de aplicación de las normas de policía. El poder y la función de policía, a su vez, se distinguen de la actividad de policía, que es pura ejecución material de las normas y actos que surgen del ejercicio del poder y la función de policía.⁴

En este paso de la generalidad a la concreción en la gestión administrativa, es pertinente resaltar la exigencia de que los actos y hechos más concretos deben siempre estar conformes con el marco de legalidad que les imponen los actos más generales, hasta llegar a la Constitución Política

Teniendo en cuenta que los Servidores Públicos deben adelantar sus funciones con observancia del ordenamiento jurídico, esta obligación se predica, igualmente, frente al desarrollo de la actividad de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control que ejerce la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA, pues para la consecución de los distintos fines dispuestos por la Constitución, es necesario que las conductas públicas se adecuen y ejerzan obedeciendo la Ley, esto es, respetando las competencias definidas por la normatividad





RESOLUCIÓN 224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

"() se ha expresado, en forma reiterada, que i) la potestad sancionadora como potestad propia de la administración es necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la realización de sus fines⁸, pues ii) permite realizar los valores del orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia propende indudablemente a la realización de sus cometidos⁹ y iii) constituye un complemento de la potestad de mando, pues contribuye a asegurar el cumplimiento de las decisiones administrativas."¹⁰ (Negrilla fuera del texto)

En igual sentido, la Doctrina ha señalado que la potestad sancionadora de la Administración es la "() atribución propia de la Administración que se traduce en la posibilidad jurídica de la imposición de sanciones a los particulares y aún a los funcionarios que infringen sus disposiciones, o a sus servidores que, en el ejercicio de sus funciones, transgreden sus mandatos o desconocen sus prohibiciones "¹¹

Es importante, entonces, tener presente el alcance y los fundamentos propios de la actividad punitiva de la Administración, en cuanto al desarrollo de sus funciones, conforme a lo cual «para la sana ejecución de los fines propios del Estado», y en ejercicio de funciones administrativas, la Administración tiene la potestad de imponer sanciones, ya sea a los mismos funcionarios públicos o a los particulares, respetando las disposiciones legales.

En cuanto a la finalidad de la potestad sancionadora de la Administración, la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL ha señalado que ". constituye un instrumento de autoprotección, en cuanto contribuye a preservar el orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia contribuye indudablemente a la realización de sus cometidos "¹²

De acuerdo con lo anterior, la imposición de sanciones, por parte de la Administración, tiene naturaleza correctiva, pues pretende instar al obligado a cumplir los compromisos adquiridos. Al respecto ha expresado el máximo TRIBUNAL DE LO CONSTITUCIONAL



GOBERNACIÓN DEL HUILA



RESOLUCIÓN 2224 DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

"En ejercicio de la potestad administrativa sancionadora el Estado está habilitado para imponer sanciones disciplinarias y correctivas. Las primeras destinadas a reprimir las conductas desplegadas por los funcionarios y empleados por la violación de deberes, obligaciones y

prohibiciones; y las segundas orientadas a sancionar las infracciones cometidas por particulares frente al desconocimiento de regulaciones, mandatos, obligaciones y limitaciones establecidas para reglar determinadas materias. En consecuencia, la inobservancia, por parte de los administrados, de ciertos mandatos, prescripciones y reglas establecidas para garantizar el buen funcionamiento de la administración y lograr una eficiente prestación del servicio, genera una actuación positiva por parte del Estado que se traduce en el ejercicio de su poder sancionador"¹³ (Negrillas fuera del texto)

Así, para el correcto ejercicio de la potestad sancionatoria se exige observar el derecho al debido proceso, como también el principio de proporcionalidad", en el cual se debe apoyar el servidor público, y eventualmente el juez, para imponer una sanción, como se verá más adelante

3.- El sometimiento de la administración a la legalidad.- El principio de legalidad se ha establecido como uno de los más importantes instrumentos de garantía ciudadana, un verdadero límite a los poderes del Estado, y más aún frente al ejercicio del poder punitivo. Es la propia Constitución Política (Art. 29) quien impone a las Autoridades Judiciales y Administrativas realizar las actuaciones de conformidad con los **principios del debido proceso, incluida la legalidad y tipicidad de las conductas**. Dispone la norma

"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio."¹⁵ (Negrillas fuera del texto)

Este precepto contiene un mandato claro. Las autoridades [administrativas o judiciales] tienen la obligación de adelantar sus actuaciones conforme al **principio de legalidad**; más aún



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716; e-mail ssalud@huila.gov.cowww.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SC4353 - 1



RESOLUCIÓN 2224 DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

cuando se trata de la potestad sancionadora, como quiera que él es pilar fundamental del derecho sancionador del Estado¹⁶¹⁷.

En este orden de ideas, para valorar la legalidad de la imposición de la sanción, como ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, se debe verificar, siempre, si dicha potestad se encuentra autorizada por la ley, toda vez que la Administración debe tener en cuenta que siempre que se acuda a una de estas figuras, deberá cumplirse, previamente, con los postulados propios del **principio de legalidad**.

El principio de legalidad, tiene diversas lecturas o aplicaciones: Una fuerte y otra débil

La primera hace alusión a que la falta y la sanción deben estar contempladas en una Ley, en sentido formal o material, de manera que la garantía de la legalidad se incrusta en lo más íntimo del principio democrático, pues se exige que una norma con la jerarquía y solemnidad de la Ley sea quien desarrolle el ius puniendi del Estado. De este tipo es el régimen sancionador penal, disciplinario, fiscal, y en materia laboral. **La otra**, la débil, donde se enmarcan la mayoría de las sanciones, hace relación a que lo determinante no es que una Ley sea quien contemple las faltas y las sanciones, sino que sea una norma «por ejemplo un decreto, resolución o reglamento» quien en forma previa y clara las estipule. A este grupo pertenecen buena parte de las sanciones administrativas, las cuales no están consagradas en una ley expedida por el Legislador o por el Ejecutivo al amparo de facultades extraordinarias, sino en simples reglamentos administrativos internos.

Obsérvese cómo el "principio de legalidad" «predeterminación de las conductas en la Ley», en materia laboral se reduce a la simple "tipicidad" de la conducta «descripción y especificación normativa del comportamiento prohibido», **pues lo determinante no es que la Ley contemple la falta y la sanción, sino que estén previamente definidas en cualquier norma**, sin que importe que sea o no una ley quien lo haga.

Luego entonces, atendiendo las funciones de policía administrativa que recae en este Ente Territorial, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA, tal actividad debe desarrollarse dentro del marco de la legalidad. Asegurar que éste límite no sea franqueado es el fin último de gran parte de las normas del derecho administrativo,





RESOLUCIÓN 2224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

y también es el objetivo que se pretende lograr cuando se establece la posibilidad de someter a revisión jurisdiccional las decisiones de la administración. Dentro de este propósito, se exige a la Administración observar la motivación de sus actos, su publicidad, la garantía del derecho de defensa dentro del procedimiento que conduce a la decisión, la coherencia entre la motivación y la decisión, y la proporcionalidad, razonabilidad y oportunidad de la misma, entre otras. Así mismo, se requiere que quien toma la decisión esté específicamente autorizado para hacerlo [lo que remite al problema de la competencia, tanto en su ámbito territorial y temporal, como de contenidos].

Estas limitaciones a la función de policía, que provienen de la Ley y también de la Constitución, **excluyen per se la existencia de actos puramente discrecionales por parte de la administración en el ejercicio de la función de policía**. Esto implica que la vieja distinción entre el acto puro reglado y el acto puro discrecional¹⁸, debe abandonarse a favor de una que prevea que en ningún caso el funcionario puede apartarse del principio de legalidad.

4.- La garantía del derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo.- En la medida en que el ejercicio de la función de policía comporta la aplicación de normas que limitan derechos de los asociados, dentro del procedimiento que conduce a la decisión administrativa, se exige la notificación a los posibles afectados, con el fin de otorgarle la posibilidad de que participen en el procedimiento previo para defender sus intereses, siendo necesario que se le defina cuál es el objeto de la investigación, por qué se le investiga, cuáles son las normas violadas y el concepto de su violación, pues solo en esa medida se le otorgan garantías serias y reales al Investigado para que ejerza su derecho de defensa y contradicción, y permite que éste otorgue elementos de juicios que en un momento dado, sirven como fuente para motivar una decisión. Estas reglas y garantías para el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción y, propios de todo debido proceso, no se han cumplido en esta actuación administrativa, toda vez que: i) Se sanciona dos veces por los mismos hechos, ii) Se impone gravamen por hechos o conductas que no fueron imputadas, iii) Se imputan unos hechos y se sanciona por otros no señalados en el auto de imputación de cargos, iv) Las normas que se imputan como violadas no son las mismas que se señalan en el acto administrativo sancionatorio, v) Impone medidas sancionatorias disímiles a sujetos iguales, vi) Se sanciona la conducta con dualidad de sanción —amonestación y multa—; vii) Carece de dosimetría la sanción; entre otros.



RESOLUCIÓN 2224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

En efecto, tanto para el caso de las actuaciones administrativas iniciadas por petición de un particular, como las iniciadas de oficio, el Código Contencioso Administrativo exige que se efectúe una citación a los posibles interesados, legitimando con ello la protección de los derechos de los Sujetos Pasivos que deben intervenir, mediante el cumplimiento del principio de publicidad

La garantía del derecho de defensa es ampliada en los artículos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los que se establece la autorización para pedir y decretar pruebas de oficio o a petición del interesado, allegar informaciones, sin requisitos ni términos especiales, la oportunidad que tienen los interesados para expresar sus opiniones; y la obligación de la administración de motivar la decisión

*A manera de ejemplo de los requisitos que debe cumplir un procedimiento administrativo sancionatorio para estar acorde con la Carta Política, la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL mediante Sentencia T-457 de 2005, señaló los **requisitos mínimos** que debe presentar una actuación administrativa. En relación con los requisitos dijo la Corte al analizar una actuación administrativa adelantada por un Ente Educativo del Estado*

"En particular, el derecho al debido proceso, en los procedimientos sancionadores aplicados por las instituciones educativas, sólo queda garantizado si el mencionado procedimiento comporta, como mínimo, las siguientes actuaciones

- (1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción,*
- (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias,*
- (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados,*
- (4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas allegadas en su contra y aportar las que considere necesarias para sustentar sus descargos;*





SGN-C054-F04

GOBERNACION DEL HUILA

2224

RESOLUCIÓN DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

(5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente,

(6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron, y

(7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes ^{19 20}

(8) **5.-La vía gubernativa como garantía de la administración y de los**

(9) **administrados.** El derecho de defensa de los posibles afectados por una decisión de la administración, es garantizado mediante la consagración de la posibilidad de recurrir las decisiones que expida ésta en sede administrativa, antes de acudir a la vía jurisdiccional

(10) Para los administrados, esta garantía se concreta de dos formas. i) Les permite acudir ante el mismo funcionario que expidió el acto (recurso de reposición) o ante su superior jerárquico (recurso de apelación), con el fin de que lo revise, modifique o revoque, de ser el caso, y ii) Se suspende el carácter ejecutorio del acto mientras se resuelven los recursos interpuestos

(11) Ahora bien, la vía gubernativa no es sólo ni principalmente una garantía para los administrados, es también una garantía para la administración, quien a través de la exigencia de la interposición de recursos asegura la posibilidad de revisar sus decisiones antes de que éstas sean sometidas al escrutinio judicial, lo que le permite ahorrar los altos costos que se derivan de una decisión ilegal

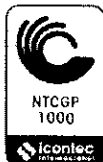
(12) La exigencia para los administrados de agotar la vía gubernativa, constituye un obstáculo que puede diferir el acceso a la vía jurisdiccional, más promisorio y cierta en la protección de sus derechos. Por esta razón, el requisito del agotamiento de la vía gubernativa se excluye en algunos casos en los que la naturaleza de la decisión administrativa o el rango del funcionario que la ha tomado, hacen demasiado gravosa la exigencia de ese requisito para el administrado. Aunque, en realidad, la exclusión de agotar la vía gubernativa responde más al deseo de salvaguardar los intereses de la administración, que no son otros que los que se derivan del interés general

(13) **6.- Del principio de la proporcionalidad.-** El ejercicio de la potestad

(14) sancionadora de la Administración en el campo administrativo, disciplinario, penal, contractual «como en cualquier otra área», exige «como antes lo referencié», la concreción de diversos principios «legalidad, proporcionalidad, tipicidad de la conducta, entre otros». Únicamente con la observancia y aplicación de cada uno de ellos puede ejercerse esta potestad, en relación con la imposición de multas o sanciones pecuniarias

(15) El principio de proporcionalidad, como principio general del derecho, ha sido catalogado jurisprudencialmente como una regla general, en razón a que se establece en el ordenamiento jurídico como un elemento extrasistemático que el juez o servidor público con facultades para sancionar, deberá materializar al momento del fallo o expedición de una decisión administrativa, y, así mismo, por encontrarse positivizado en el ordenamiento jurídico colombiano (artículo 44 Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo) ²¹

(16) La Doctrina ha resaltado la importancia del principio de proporcionalidad en el ejercicio de cada una de las actuaciones administrativas, destacando dos aspectos primordiales. **El primero**, al



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716, e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernacion del Huila – El Camino es la Educacion



SC4353 - 1



SGN-C054-F04

GOBERNACION DEL HUILA

RESOLUCIÓN **2224** DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

establecerlo como principio de acción y, **el segundo**, al determinar la existencia de un control de proporcionalidad al momento de decidir e imponer gravámenes. Al respecto se ha expuesto²²

(17) "Así, la vertiente "normativa" o de mandato del principio se refiere a la puesta en práctica del mismo en actos concretos, sean individuales o generales. La naturaleza implícita y explícita del principio de proporcionalidad nos obliga a contar con él en todas las esferas de

(18) actuación administrativa discrecional, de forma que su aplicación resulta obligatoria a la hora de poner en marcha cualquier tipo de actividad administrativa. Por ejemplo, la adopción de una orden de derribo trae consigo un juicio de proporcionalidad por parte del órgano administrativo competente, al igual que la ejecución forzosa de la misma. En este sentido podemos hablar de un principio en el ejercicio de las potestades administrativas, cuya virtualidad consiste en orientar el buen uso de las

(19) mismas

(20) "En el derecho administrativo, esta vertiente del principio se manifiesta en la resolución del órgano correspondiente. La aplicación del test no se suele manifestar de manera expresa -como en el caso del control de proporcionalidad, que llega incluso a caracterizarse por una triple estructura- pero existen supuestos en que la normativa aplicable exige a la Administración la realización de un juicio similar al de proporcionalidad. **La expresión de este razonamiento en el seno de la resolución constituye la aplicación del principio en el ejercicio de las potestades administrativas, susceptible de ulterior control por parte de un órgano jurisdiccional (e incluso de la misma administración en vía recurso).**

(21) "()

(22) "Una segunda vertiente aplicativa del principio se realiza en el momento de control del ejercicio de las potestades administrativas, y su función es radicalmente distinta aunque vinculada a la primera. El control jurídico de la actividad administrativa se caracteriza por ser una función negativa (de interdicción) que marca límites a aquella, al mismo tiempo que se encuentra mayoritariamente en manos de los Tribunales" (Negrilla fuera

(23) del texto)

(24) En este horizonte, se itera, el principio de proporcionalidad cumple dos funciones: i) **En primer lugar**, sirve de criterio de acción, esto es, como sustento de las actuaciones de los distintos órganos del Estado, el cual se realiza con su observancia y aplicación a cada caso concreto; ii) **En segundo lugar**, es un criterio de control, pues debe adoptarlo el operador de justicia para efectos de evaluar y calificar la decisión sancionatoria a adoptar. Por lo tanto, exige un juicio ex-ante y otro ex-post, en relación con la decisión administrativa, más aún, cuando se trata del ejercicio de una potestad de naturaleza sancionatoria.

En este sentido, el análisis del principio de proporcionalidad adquiere gran importancia, para efectos de lo que se examina en el presente caso, pues, considerando que la entidad pública —Secretaría de Salud Departamental del Huila— impone doble sanción por los mismos hechos, esto es, **amonestación y multa**; en el equivalente a **mil (1.000) salarios diarios mínimos legales vigentes para el año 2018**, es decir, la suma de veintiséis



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716, e-mail saalud@huila.gov.cowww.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernacion del Huila – El Camino es la Educacion

SC4353 - 1

157



GOBERNACIÓN DEL HUILA

**RESOLUCIÓN 2224 DE 2018****Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición**

millones cuarenta y un mil cuatrocientos pesos (\$26.041.400.00) m/cte.; sanción última sobre la cual es necesario considerando, así mismo, que cumplió con los postulados de legalidad.

iv) Elementos sustanciales y probatorios desatendidos dentro del procedimiento administrativo sancionador que motivan a que la decisión contenida Resolución No. 1382 del diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018), carezca de validez.-

SALUD LASER S A S se le sanciona por el incidente presentado por la misión médica de las Empresas habilitadas para la prestación del servicio de transporte de ambulancia básica SALUD LÁSER S A S y EMERCONT COLOMBIA S A S., el tres (3) de julio de dos mil diecisiete (2017), conducta que, como señalamos en prosas anteriores, resultó objeto de investigación y sanción por este Ente Territorial

Así mismo, se le imputaron como normas violadas, las cuales no fueron analizados su concepto de violación, tanto en el auto de cargos como en el acto administrativo sancionatorio —causal que vicia de legalidad la decisión administrativa— en el auto imputación de cargos se imputa de manera conjunta a los dos investigados el mismo hecho y como normas violadas, la señalada en el artículo 15 del Decreto 1011 de 2006, "Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud", como también, el artículo 5° de la Resolución 2003 del 2014, "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud", expedida por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,

Debemos partir de la premisa que, en el Sistema Jurídico Colombiano las superintendencias ejercen funciones asignadas, en principio, al Presidente de la República, como son, entre otras, las relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre entidades que se encargan de la prestación de los servicios públicos (Núm 2° Art 189 Constitución Política), entre éstas, el servicio de salud

Es competencia de las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, sin perjuicio de las competencias que le corresponden a la Superintendencia Nacional de Salud, adelantar las acciones de vigilancia, inspección y control sobre la calidad en la



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130Línea gratuita 01 8000 968 716; e-mail ssalud@huila.gov.cowww.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernacion del Huila – El Camino es la Educación

SC4353 - 1



GOBERNACIÓN DEL HUILA

RESOLUCIÓN 2224 DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

atención y prestación de los servicios de Salud por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones

Las sanciones las pueden imponer el Ente Departamental a la Entidad Prestadora del Servicio de Salud Investigada, cuando se encuentre demostrado que se infringieron los sistemas en la prestación de los servicios de salud, es decir, cuando éstas incumplan lo dispuesto en el Decreto 1011 de 2006, "Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud" y la Resolución 2003 del 2014, "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud", expedida por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, previo seguimiento del procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Lo anterior es necesario decantarlo, pues la sanción impuesta, aparte de constituir atropello a los derechos fundamentales de mi Representado, al sancionarse dos veces por los mismos hechos, imponer gravamen por hechos o conductas que no fueron imputadas, imputan unos hechos y sancionarse por otros no señalados en el auto de imputación de cargos, no existir congruencia entre las normas que se imputan como violadas con las imputadas en el acto administrativo sancionatorio; impone medidas sancionatorias disímiles a sujetos iguales, sancionar la conducta con dualidad de sanción —amonestación y multa—; y, carecer de dosimetría la sanción; entre otros, NO ENCUENTRA ASIDERO DISTINTO AL HECHO DE QUERER IMPONER SANCIÓN SIN MOTIVACIÓN DE NATURALEZA ALGUNA, pues al analizar las consideraciones no se indica los argumentos especialmente jurídicos que permitan inferir o justificar de manera razonada, lógica y ponderada los elementos jurídicos que soportan la medida sancionatoria adoptada, aspectos que desembocan en una falencia en los requisitos y elementos del acto administrativo denominados competencia y motivación adecuada

La SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA en el acto administrativo sancionatorio, no indica, en concreto, la base legal para imponer una medida sancionatoria en contra de la SALUD LASER S A S, con lo que se evidencia la inexistencia de causa jurídica que permita estructurar la decisión que es objeto de cuestionamiento, trastornándose



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716, e-mail: ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación



SC4353 - 1

156



GOBERNACION DEL HUILA



2224

RESOLUCIÓN _____ DE 2018**Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición**

el requisito o elemento de la esencia y validez de los actos administrativos denominado causa o motivo.

En el caso sub exámíne, aduce el acto administrativo sancionatorio que el hecho que motiva al inicio de la investigación y por el cual se le sanciona obedece al incidente presentado por la misión médica de las Empresas habilitadas para la prestación del servicio de transporte de ambulancia básica SALUD LÁSER S A S y EMERCONT COLOMBIA S A.S., el tres (3) de julio de dos mil diecisiete (2017), conducta que, itero, fue objeto de estudio, análisis, controversia y decisión por la Administración

Así mismo, en la actuación administrativa se encuentra acreditado que SALUD LASER S A S. cumple con los requisitos de habilitación de los Servicios de Traslado Asistencial Básico (TAB) de Ambulancia Terrestre, de conformidad con el Sistema Obligatorio de Garantía en la Calidad de la Salud.

*Téngase en cuenta que la "Habilitación" de servicios se entiende como el cumplimiento de **requisitos mínimos de garantía en la prestación de servicios de salud**, y consta de tres condiciones: Suficiencia patrimonial y financiera, Condiciones Técnico-administrativas y Condiciones Técnico-científicas, de conformidad con el Decreto 1011 de 2006²³, expedido por el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, los cuales se encuentran acreditados dentro del procedimiento por parte de SALUD LASER S A.S*

Al respecto, debo aclarar que la SALUD LASER S A S realizó la respectiva inscripción ante esa Secretaría y se encuentra habilitada para prestar los servicios de Traslado Asistencial Básico

Por consiguiente, los criterios de habilitación para el traslado asistencial de Pacientes están relacionados con la carrocería, con las luces exteriores, con las condiciones generales del interior del vehículo, con el sistema eléctrico, con el sistema sonoro y de comunicaciones, con la dotación, los insumos y las herramientas —Anexo Técnico No. 1 de la Resolución No 1043 del 3 de abril de 2006²⁴—

En consecuencia, el cumplimiento de dichos requisitos nada tienen que ver con el acaecimiento del insuceso objeto de investigación, como es, el reproche comportamental del



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716, e-mail esalud@huila.gov.cowww.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernacion del Huila – El Camino es la Educacion

SC4353 1



RESOLUCIÓN 222 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

personal que prestan sus servicios a Entidades, que como las Investigadas, prestan los servicios de salud

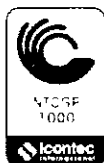
Téngase en cuenta que las competencias administrativas otorgadas a las Direcciones Seccionales de Salud o Secretaría de Salud Departamentales, para ejecutar las funciones de dirección, coordinación y vigilancia del sector salud en el Sistema General de Seguridad Social, se encuentran reguladas en la Ley 10 de 1990, 100 de 1993, 715 de 2001 y 1122 de 2007

*Así, el literal c) del artículo 1° de la Ley 10 de 1990, señala que la intervención del Estado en el sector público de salud, se realiza con el fin de fijar los niveles de atención en salud y los grados de complejidad **"para los efectos de las responsabilidades institucionales en materia de prestación de servicios de salud"**. Es decir, la responsabilidad que compete investigar a las Secretarías de Salud es netamente **INSTITUCIONAL**, haciendo alusión a los aspectos corporativos que tienen que ver con la funcionalidad de las entidades que prestan los servicios de salud, desde su ámbito funcional de VIGILANCIA Y CONTROL.*

Por su parte, el artículo 43 de la Ley 715 de 2.001 «en la cual se estableció el Sistema General de Participaciones, y con él las nuevas competencias territoriales en salud», dispone:

"COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN SALUD. Sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones:

43 1 1 Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en armonía con las disposiciones del orden nacional





GOBERNACION DEL HUILA



RESOLUCIÓN 2224 DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

43 1 2 Adoptar, difundir, implantar, ejecutar y evaluar, en el ámbito departamental las normas, políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que formule y expida la Nación o en armonía con éstas

43 1 3. Prestar asistencia técnica y asesoría a los municipios e instituciones públicas que prestan servicios de salud, en su jurisdicción (..-)

43 1 5. Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y administrativas que expida el Ministerio de Salud, así como las actividades que desarrollan los municipios de su jurisdicción, para garantizar el logro de las metas del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia atribuidas a las demás autoridades competentes.

43.2. De prestación de servicios de salud

43.2 4. Organizar, dirigir, coordinar y administrar la red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas en el departamento.

(..)

43 2.6. Efectuar en su jurisdicción el registro de los prestadores públicos y privados de servicios de salud, recibir la declaración de requisitos esenciales para la prestación de los servicios y adelantar la vigilancia y el control correspondiente

(- -)

"43 2 8 Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la Nación para la construcción de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de las instituciones prestadoras de servicios de salud y de los centros de bienestar de anciano"

Entre tanto, el Decreto 1011 de 2 006, en su Art 5° núm 3°, cita



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716; e-mail salud@huila.gov.co

www.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernacion del Huila – El Camino es la Educacion



SC4353 1



RESOLUCIÓN 2224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

"Entidades Departamentales y Distritales de Salud. En desarrollo de sus propias competencias, les corresponde cumplir y hacer cumplir en sus respectivas jurisdicciones, las disposiciones establecidas en el presente decreto y en la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social, divulgar las disposiciones contenidas en esta norma y brindar asistencia a los Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como tales para el cabal cumplimiento de las normas relativas a la habilitación de las mismas.

43.1. De dirección del sector salud en el ámbito departamental.

El artículo 19 a su vez dispone

"VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA HABILITACIÓN
Las Entidades Departamentales y Distritales de Salud serán las responsables de verificar el cumplimiento de las condiciones exigibles a los Prestadores de Servicios de Salud en lo relativo a las condiciones de capacidad técnico administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera, las cuales se evaluarán mediante el análisis de los soportes aportados por la Institución Prestadora de Servicios de Salud, de conformidad con los artículos 8° y 9° del presente decreto. En relación con las condiciones de capacidad tecnológica y científica, la verificación del cumplimiento de los estándares de habilitación establecidos por el Ministerio de la Protección Social, se realizará conforme al plan de visitas que para el efecto establezcan las entidades Departamentales y Distritales en Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del presente decreto."

Seguidamente, el artículo 49 ibíd, dispone **INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN. La inspección y control del Sistema Único de Habilitación, será responsabilidad de las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, la cual se ejercerá mediante la realización de las visitas de verificación de que trata el artículo 21 del presente decreto, correspondiendo a la Superintendencia Nacional de Salud, vigilar que las Entidades Territoriales de Salud ejerzan dichas funciones "**



RESOLUCIÓN 2224 DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

Así las cosas, le corresponde a esa Secretaría dirigir, coordinar y vigilar el sector y el Sistema de Seguridad Social en Salud, su labor implica formalizar una organización técnico administrativa basada en las líneas misionales del sector, como son las áreas de dirección, prestación de servicios de salud, salud pública, y aseguramiento, y una organización de planeación, jurídica, administrativa, y financiera, que garantice atender oportuna y técnicamente los procesos misionales del sector, con mecanismos de soporte y apoyo de los mismos en la región, y de manera expedita, en casos de eventos de emergencia, epidemias, catástrofes naturales, entre otros

Y en cumplimiento de esta medida, que se inició proceso administrativo soportado en los mismos hechos que se edifica este procedimiento administrativo, y se tomaron medidas con miras a corregir y prevenir la ocurrencia de hechos iguales o similares, a los que sirven de fuente fáctica y jurídica para sancionar a las Investigadas

Obsérvese que en el auto de imputación de cargos se señala como hecho fundante de la sanción en contra de SALUD LASER S A S , que el Paciente se haya dispuesto ser trasladado a la CLÍNICA DE FRACTURAS Y ORTOPEDIA S A S , hecho que en momento alguno sirve de causa para el inicio de la investigación e imputación de cargos Téngase en cuenta que al modificarse la conducta por la cual se sanciona respecto del auto de imputación de cargos, vulnera el principio de contradicción como una manifestación plena del debido proceso, pues es un hecho nuevo que no se controvertió y sobre el cual la Administración no motiva el inicio de la actuación ad Observemos que se sanciona con multa de una manera carente de razonabilidad porque el Paciente se traslada a la CLÍNICA DE FRACTURAS Y ORTOPEDIA S.A.S., y no, se dispuso se remisión a la CLINICA MEDILASER S A o la CLÍNICA DE EMCONSALUD S A , lo cual, en criterio de este Ente resultaba más cerca, afectando la calidad en la prestación de los servicios sanitarios, afectando la accesibilidad y oportunidad del Usuario de recibir atención sanitaria oportuna, conclusiones reprochables, pues el Usuario — Paciente, Humberto Cumbe Trujillo, manifiesta su decisión que lo trasladen a la CLÍNICA DE FRACTURAS Y ORTOPEDIA S.A.S., Institución Prestadora donde se encontraba personal médico y paramédico para brindar atención oportuna, hecho que, en la realidad se verificó

Es censurable que se sanciones porque, sin criterio técnico que lo justifique, resultaba más cerca del lugar donde ocurrió los hechos, trasladar al Paciente a la CLINICA



RESOLUCIÓN 0224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

MEDILASER S A O la CLÍNICA DE EMCONSALUD S A , desconociendo técnicamente la arquitectura y los diseños viales de la vías de acceso a estas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, resultando en tiempo, la posibilidad de tener mejor acceso a la CLÍNICA DE FRACTURAS Y ORTOPEDIA S A S , que a la Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, citadas

Consideramos, respetuosamente, que la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL HUILA recae en posturas que desdican del ejercicio del poder de policía administrativo, emitiendo decisiones administrativas sin contar siquiera con una fundamentación fáctica o jurídica que viabilice su actuación administrativa, contraria a derecho y a los principios y garantías constitucionales

*Y es que los actos administrativos doctrinariamente se definen como la manifestación externa por las cuales se expresa la voluntad de la Administración Estatal, los cuales se amparan en una presunción de **legalidad**, que se deriva del principio según el cual la administración **está sujeta en su actividad al ordenamiento jurídico**, en el entendido que todos los actos que dicte y las actuaciones que realice, **deben respetar normas jurídicas superiores**, dado que en virtud de sus competencias regladas, no puede hacer todo lo que quiera, sino solamente aquello que expresamente le permita o autorice la ley. En este sentido el ejercer las actividades de inspección, vigilancia y control, implica darle cumplimiento a cada norma especial que regula un campo específico.*

En éste sentido, en Sentencia C-860 del 18 de octubre de 2006 —Expediente D6235, siendo Magistrado Ponente el Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, la Sala Plena de la CORTE CONSTITUCIONAL señaló respecto al principio de legalidad en materia de los puniendi administrativo

"Un examen atento de la jurisprudencia de la Corte en materia de derecho administrativo sancionatorio, evidencia la existencia de unas claras líneas jurisprudenciales en la materia. En efecto, si bien se ha reconocido que esta modalidad hace parte del derecho punitivo del Estado²⁵, la jurisprudencia ha destacado que esta modalidad jurídica ministrativa sancionatoria.





RESOLUCIÓN **2224** DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

*persigue fines propios ligado con los **principios teleológicos que orientan la actividad de la Administración**. Así, en la sentencia C-214 de 1994 se consigna al respecto*

"[La] potestad sancionadora como potestad propia de la administración es necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones y la realización de sus fines, pues () permite realizar los valores del orden jurídico institucional, mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia propende indudablemente a la realización de sus cometidos (.)".

"Por esa razón se ha entendido que hace parte de de las competencias de gestión que constitucionalmente se le atribuyen a la Administración "pues es indudable que si un órgano tiene la facultad jurídica para imponer una obligación o para regular una conducta con miras a lograr la realización del interés general, el incumplimiento de ese mandato correlativamente debe implicar la asignación de atribuciones sancionatorias bien sea al mismo órgano que impuso la obligación o a otro distinto, con el propósito de asegurar la vigencia del orden jurídico mediante la imposición de los castigos correspondientes"²⁶

*"Debido a las finalidades propias que persigue, y a su relación con los poderes de gestión de la Administración, la jurisprudencia constitucional, ha sostenido reiteradamente que el derecho administrativo sancionador guarda importantes diferencias con otras modalidades del ejercicio del ius puniendi estatal, específicamente con el derecho penal, especialmente en lo que hace referencia a los principios de legalidad y de tipicidad, al respecto se ha sostenido que si bien los comportamientos sancionables por la Administración deben estar previamente definidos de manera suficientemente clara²⁷, el principio de legalidad opera con menor rigor en el campo del derecho administrativo sancionador que en materia penal²⁸; por lo tanto el uso de conceptos indeterminados y de tipos en blanco en el derecho administrativo sancionador resulta más admisible que en materia penal ²⁹ En esa medida el principio de legalidad consagrado en la Constitución adquiere matices dependiendo del tipo de derecho sancionador de que se trate³⁶ y aunque la tipicidad hace parte del derecho al debido proceso en toda actuación administrativa, no se puede demandar en este campo el mismo grado de rigurosidad que se exige en materia penal, por cuanto la naturaleza de las conductas reprimidas, **los bienes jurídicos involucrados y la***



SGN-C054-F04

GOBERNACION DEL HUILA

RESOLUCIÓN **2224** DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

teleología de las facultades sancionatorias en estos casos hace posible también una flexibilización razonable de la descripción típica³¹.

"Tal flexibilidad en materia de legalidad y tipicidad se ha justificado por la variabilidad y el carácter técnico de las conductas sancionables, que dificultaría en grado sumo la redacción de un listado minucioso por parte del legislador, así como el señalamiento en cada caso de dichos supuestos técnicos o específicos que permitan al propio tiempo determinar los criterios para la imposición de la sanción. Adicionalmente en ciertas áreas sujetas al control de la Administración, que se caracterizan por su constante evolución técnica, la exigencia rigurosa del principio de legalidad acarrearía en definitiva la impunidad y la imposibilidad de cumplir con las finalidades estatales³².

"En esa medida la flexibilidad en la configuración del tipo sancionatorio persigue garantizar la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de los deberes constitucionales a cargo de la Administración, **sín que tales propósitos justifiquen la arbitrariedad en el ejercicio de la potestad sancionadora.** Así ha manifestado que

"() guarda coherencia con los fines constitucionales de esta actividad sancionatoria administrativa, que las hipótesis fácticas establecidas en la ley permitan un grado de movilidad a la administración, de forma tal que ésta pueda cumplir eficaz y eficientemente con las obligaciones impuestas por la Carta. Sin embargo, debe precisarse que la flexibilidad del principio de legalidad no puede tener un carácter extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la administración en la imposición de las sanciones o las penas. **Por el contrario, en el derecho administrativo sancionador el principio de legalidad exige que directamente el legislador establezca, como mínimo, los elementos básicos de la conducta típica que será sancionada, las remisiones normativas precisas cuando haya previsto un tipo en blanco o los criterios por medio de los cuales se pueda determinar con claridad la conducta, al igual que exige que en la ley se establezca también la sanción que será impuesta o, igualmente, los criterios para determinarla con claridad**".³³

"En resumen, de acuerdo a lo consignado en los acápites anteriores de esta decisión, el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración está sujeto, entre otros, a los siguientes requisitos



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716, e-mail sa.cd@huila.gov.co

www.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernacion del Huila – El Camino es la Educación



SC4353 - 1



GOBERNACIÓN DEL HUILA

RESOLUCIÓN

2224

DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

- Debe existir una configuración normativa previa y suficiente de los supuestos que dan lugar a la sanción, y los destinatarios de la misma. Empero, no es preciso que los elementos del tipo sancionatorio estén definidos en una norma con fuerza material de ley pues en el campo del derecho administrativo sancionador es válida la técnica de la remisión normativa³⁴.
- Debe respetarse la proporcionalidad y razonabilidad entre la conducta o hecho que se sanciona y la sanción prevista, de manera tal que se asegure tanto al administrado como al funcionario competente para su imposición, un marco de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso concreto³⁵.
- En el procedimiento administrativo que se adelante para imponer una sanción **debe respetarse el derecho al debido proceso de los administrados.**
- Las entidades que ejerzan de manera simultánea y complementaria facultades de regulación y potestad sancionadora, deben prever la separación de las dependencias o funcionarios encargados del ejercicio de tales competencias, para evitar que se confunda la expedición de normas o instrucciones con el ejercicio de la potestad sancionatoria por el incumplimiento de tales actos administrativos, con la finalidad de garantizar la neutralidad e independencia de los encargados de adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio.

El amparo constitucional también ha sido otorgado cuando se desconocen los derechos fundamentales dentro de los procesos sancionatorios que adelanta la administración en contra de los particulares; así lo dejó establecido la Honorable CORTE CONSTITUCIONAL en Sentencia T-621 del 3 de agosto de 2006 —Expediente T1326292, M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO- al señalar:

"En relación con el primer aspecto, la Corte consideró, con base en el precedente constitucional aplicable al tema, que el reconocimiento del derecho fundamental al debido proceso administrativo impone el deber a las autoridades públicas de (i) **garantizar el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción frente a las distintas decisiones de la administración;** (ii) fundar todas las actuaciones que conforman el trámite administrativo en la aplicación de las normas legales correspondientes, ello como presupuesto tanto de la seguridad jurídica como de la validez misma de esas actuaciones, y (iii) ejercer las facultades constitucionales y legales de que son titulares de forma tal que resulten compatibles con la protección efectiva de los derechos fundamentales



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716; e-mail ssalud@huila.gov.co

www.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación



SC4353 - 1



GOBERNACION DEL HUILA

RESOLUCIÓN 2224 DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

"Conforme estas consideraciones, la sentencia en comento reafirmó la posibilidad que los actos de la administración pudieran incurrir en graves falencias que, al interferir en el ejercicio de derechos fundamentales, pudieran ser remediadas a través de la acción de tutela. En todo caso precisó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, la procedencia del amparo en estos casos era excepcional y, por ende, estaba supeditado al cumplimiento de requisitos estrictos. Ello en la medida en que controversias jurídicas de esta naturaleza son asuntos que, de manera general, deben debatirse a través de los mecanismos propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Con el fin de apoyar esta conclusión, reiteró lo señalado por la Corte en la sentencia T-241/04, en el sentido que "el recurso de amparo sólo será procedente, en consecuencia, cuando la vulneración de las etapas y garantías que informan los procedimientos administrativos haya sido de tal magnitud, que los derechos fundamentales de los asociados no cuentan con otro medio de defensa efectivo. El recurso de amparo, como sucede en las hipótesis de protección de todos los derechos fundamentales, es subsidiario y residual, lo que implica que si la persona cuenta con un medio de defensa efectivo a su alcance o, habiendo contado con el mismo, de manera negligente lo ha dejado vencer, la tutela devendrá improcedente. En caso de existir otro medio de defensa, procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".

Téngase en cuenta que aunque el procedimiento administrativo es una facultad reglada de la Administración -y no de una discrecional-, debe ser fundada no sólo en los **principios constitucionales, sino también en aquellos que dirigen las actuaciones administrativas de las entidades (Función Pública)**, y que debe tener en cuenta los derechos de los administrados en todo tipo de actuaciones, más aún si se trata de sanciones que involucran o afectan intereses patrimoniales de las personas jurídicas (públicas o privadas). Si bien es cierto, algunas conductas pueden derivar un resultado sancionatorio, ello no es óbice para que no se cumpla dentro del procedimiento adelantado, las garantías que debe observar la Administración para realizar un pronunciamiento «sea éste favorable o desfavorable».

Advertidas los yerros y vicios que adolece la actuación y decisión administrativa contenida en la liquidación oficial No. RDO-2017-03816 del veintiuno (21) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), le asiste el deber a la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716, e-mail info@huila.gov.cowww.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernacion del Huila – El Camino es la Educación

SC4353 - 1

**RESOLUCIÓN 2224 DE 2018****Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición**

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, de anularla

En conclusión, en la Resolución No. 1382 del diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018), "Por medio del cual se sanciona a prestadores de servicios de salud", en los siguientes términos

Las consideraciones expuestas, junto con los medios probatorios que se incorporan con este ejercicio de defensa y los que se integraran en el proceso, permitirán al Operador Administrativo establecer sin lugar a equívocos que, SALUD LASER S.A.S es una Compañía que respeta y cumple la Constitución y la Ley en materia del servicio de salud, es necesario que este digno Despacho ordene el cierre y, el consecuencial archivo, del caso sub lite

PETICIÓN Y MEDIOS DE PRUEBA QUE DEBERÁN DECRETARSE Y PRACTICARSE**i) Testimoniales.-**

*Cítese a declarar al señor **HUMBERTO CUMBE TRUJILLO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 12.107 409, residente en la Carrera 23 No. 17 — 23 de la ciudad de Neiva, para que informe todos los antecedentes en la prestación de los servicios médicos sanitarios prestados por Salud Laser S.A S , el tres (3) de julio de dos mil diecisiete (2017), y demás circunstancia y hechos afines a este investigación*

PETICIÓN

En mérito de lo expuesto, ruego se declare la nulidad de la actuación y se reponga o revoque la decisión administrativa sancionatoria impuesta a SALUD LASER S.A.S "

RESOLUCIÓN 2224 DE 2018

Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La Secretaria de Salud Departamental del Huila, de conformidad con sus atribuciones y competencias legales, procederá seguidamente a resolver el recurso de reposición interpuesto por el señor FRANCISCO ANDRES ROJAS DEVIA **Representante Legal de SALUD LASER S.A.S.** contra la decisión administrativa contenida en la Resolución 1382 del 17 de julio de dos mil dieciocho (2018).

Previamente se hace necesario establecer si el presente recurso, cumple con los requisitos establecidos en nuestra legislación (artículo 74 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo), concluyendo que SALUD LASER S.A.S cumple con todos y cada uno de los requerimientos contenidos en los citados artículos.

Igualmente se advierte que el prestador de servicios de salud SALUD LASER S.A S, solicita en su escrito de recurso de reposición, se decrete y se practique una prueba de carácter testimonial, consistente en *citar a declarar al señor HUMBERTO CUMBE TRUJILLO, para que informe sobre los antecedentes en la prestación de los servicios sanitarios prestados por SALUD LASER S.A, el 03 de julio de 2017 y demás circunstancias y hechos afines a esta investigación.* Al respecto, este Despacho, considera que la oportunidad procesal para realizar dichas solicitudes venció, conforme lo establece la ley 1437 de 2011, pese a ello y luego de analizar si dicha prueba reviste el carácter de ser necesaria, pertinente y conducente, se concluye que no lo es, teniendo en cuenta que está suficientemente soportada documentalmente la actuación investigada por esta Autoridad Sanitaria ocurrida el 03 de julio de 2018 y tampoco se evidencia la existencia de vacíos o dudas referentes a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos y o situaciones objeto de control, que permitan inferir a este Despacho la necesidad de decretar la prueba solicitada en esta etapa del proceso





RESOLUCIÓN 2224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

Expuesto lo anterior, se procederá a resolver de plano el recurso de reposición interpuesto por SALUD LASER S.A.S, como lo contempla el artículo 79 y 80 de la Ley 1437 de 2011 como se expone a continuación:

En cuanto al fundamento del recurso, este Despacho, vislumbra que en concreto la inconformidad del recurrente radica en que a su juicio esta Autoridad Sanitaria *imputó a SALUD LASER S AS una serie de normas violadas las cuales no se les analizó su concepto de violación, se impuso gravamen por hecho o conductas no imputadas, no existir congruencia entre las normas que se imputan como violadas con las imputadas en el acto administrativo, así mismo aduce el recurrente que se impuso doble sanción por los mismos hechos en el presente caso a SALUD LASER S A, y carecer de dosimetría la misma*

En este sentido, es preciso acotar que este Despacho, como lo reconoce en el recurso de reposición (*oficio radicado No 38277 del 10 de agosto de 2018*) el recurrente SALUD LASER S.A.S, *ha permitido ejercer el derecho de defensa y contradicción a los investigados. En sentido amplio y estricto, esta Autoridad Sanitaria, ha respetado el ejercicio real del derecho fundamental al debido proceso en cada actuación registrada en este asunto jurídico*

Ahora, en relación con las manifestaciones realizadas por el recurrente relacionadas previamente en donde aduce, que a SALUD LASER S.A.S se le imputaron una serie de normas violadas las cuales no se les analizó su concepto de violación, además que se impuso gravamen por hechos o conductas no imputadas y que no existe congruencia entre las normas que se imputan como violadas con las imputadas en el acto administrativo, este Despacho debe manifestar al recurrente, que luego de verificar diligentemente el actuar procedimental y jurídico en este proceso, concluye que contrario a lo afirmado por SALUD LASER S.A.S, el auto de formulación de cargos relaciona directamente las normas por las cuales resulta sancionado el prestador de servicios de salud SALUD LASER S.A.S, comprobando de esta forma que si corresponden las normas imputadas como violadas en el "Auto de Apertura de



GOBERNACION DEL HUILA



RESOLUCIÓN 2224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

Investigación Administrativa y Formulación de Cargos No. 034 de 2017” con las normas que determinan la sanción establecida en la Resolución 1382 de 2018 “ Por la cual se sanciona a prestadores de servicios de salud”.

Por otra parte, es oportuno mencionar que este Despacho en la citada Resolución 1382 de 2018 “Por la cual se sanciona a prestadores de servicios de salud”, absolvió de unos cargos imputados a los investigados, al considerar que no existen los fundamentos probatorios para determinar el incumplimiento de normas citadas como vulneradas en el *Auto de Apertura de Investigación Administrativa y Formulación de Cargos No. 034 de 2017 (artículo 2.5.1.3.2.9 del Decreto 780 de 2016, artículo 5 de la Resolución 2003 de 2014 y artículo 2.3.2.8 Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud)* por parte de los prestadores de servicios de salud SALUD LASER S.A.S y EMERCONT COLOMBIA S.A.S

Continuando con el análisis de las inconformidades del recurrente, observa este Despacho, que en la decisión contenida en la Resolución 1382 de 2018 “Por la cual se sanciona a prestadores de servicios de salud”, determinó de forma razonada, detallada, congruente y explícita las razones por las cuales se sancionó a los prestadores de servicios de salud en el presente asunto; por lo tanto no tiene respaldo argumentativo lo declarado por SALUD LASER S.A.S, dado que esta entidad, respetando el principio de legalidad, aplicó lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Ley 1437 de 2011, siguiendo lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico para tomar decisiones en los procesos administrativos de carácter sancionatorio.

Así mismo, el recurrente aduce que a su juicio, se impuso doble sanción por los mismos hechos en el presente caso a SALUD LASER S.A, y que ella carece de dosimetría. Respecto de dicha manifestación, este Despacho debe expresarle a SALUD LASER S.A.S que la Ley 9 de 1979 “*Por la cual se dictan Medidas Sanitarias*” expresa en el artículo 577 “ *Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante resolución motivada, la violación de las disposiciones de esta Ley, será sancionada por la entidad encargada de hacerlas cumplir con alguna o algunas de las siguientes sanciones*



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716, e-mail: contacto@huila.gov.cowww.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación

SC4353 - 1

**RESOLUCIÓN 2224 DE 2018****Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición**

- a *Amonestación,*
- b *Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10 000 salarios diarios mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva resolución,*
- c *Decomiso de productos*
- d *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia y*
- e *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo (negritas fuera de texto original)*

Conforme a lo expuesto, la norma de forma textual expresa que se puede sancionar con alguna o algunas de las sanciones que se citan allí, es decir no se configura una vulneración y o afectación procesal al recurrente, teniendo en cuenta que una facultad legal que tiene esta entidad como Autoridad Sanitaria para imponer sanciones como resultado de un proceso administrativo sancionatorio conforme a la normatividad de nuestro ordenamiento jurídico

Finalmente, en relación con la manifestación del recurrente referida a la carencia de la dosimetría de la sanción impuesta, esta Autoridad Sanitaria procede a expresarle a SALUD LASER S A S, que conforme al literal b del artículo 577 de la Ley 9 de 1979, Ley 1437 de 2011, Decreto 1011 de 2006 compilado por el Decreto 780 de 2016 y Resolución 2003 de 2014, tiene la competencia legal para proceder a sancionar a prestadores de servicios de salud, teniendo en cuenta criterios señalados en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011

Así pues, sin existir argumentos por parte del recurrente que desvirtúen los planteados en la Resolución 1382 de 2018 "Por la cual se sanciona a prestadores de servicios de salud", indefectiblemente esta Autoridad Sanitaria, deberá confirmar la decisión adoptada en el citado acto administrativo, advirtiéndole que contra esta decisión no procede recurso alguno de conformidad con lo señalado por el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, la Secretaria de Salud Departamental del Huila, en uso de sus atribuciones y competencias legales,



GOBERNACION DEL HUILA



RESOLUCIÓN 2224 DE 2018
Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición

RESUELVE

PRIMERO. NO REPONER la Resolución 1382 de 2018 *"Por la cual se sanciona a prestadores de servicios de salud"*, proferida por la Secretaría de Salud Departamental del Huila, por las razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo

SEGUNDO. CONFIRMAR la decisión adoptada mediante Resolución 1382 de 2018 *"Por la cual se sanciona a prestadores de servicios de salud"*, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión al representante legal de SALUD LASER S.A.S, conforme lo señalado en el artículo 64 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno, conforme a lo señalado por el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado a los **19** de **SEPT** de **2018**

GLORIA ESPERANZA ARAUJO CORONADO
 Secretaria de Salud del Huila

Revisó Oscar Ordoñez Lozano

Proyectó Janeth Fernanda Martínez Rodríguez



GP 019 - 1

Carrera 20 No. 5B-36; Neiva – Huila - Colombia; PBX: 8701980 Ext130

Línea gratuita 01 8000 968 716, e-mail tsar@gmhuila.gov.co

www.huila.gov.co Twitter @HuilaGob Facebook Gobernación del Huila – El Camino es la Educación



SC4353 - 1

143